

# Las elecciones dominicanas de 1990: del reacomodo político a la crisis de legitimidad de los populismos reales

WILFREDO LOZANO \*

## 1. INTRODUCCIÓN

**L**OS RESULTADOS de las recientes elecciones dominicanas del mes de mayo dejaron a todos los analistas políticos sorprendidos por sus resultados numéricos y a las masas dominicanas desesperanzadas y sumergidas en el desconcierto. Contra todos los pronósticos electorales, incluidas las encuestas del sector oficialista en el gobierno, Joaquín Balaguer “derrotó” a su secular oponente histórico Juan Bosch por un apretado margen de 21 704 votos, lo que apenas representa una diferencia relativa de 1.6%. Ninguno de los principales partidos mayoritarios que terciaron en la contienda electoral logró un margen de votos significativo: el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y sus aliados alcanzaron el 35.4%, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) el 22.9% y el Partido Revolucionario Independiente (PRI) el 6.9% de los votos presidenciales. Con estos resultados, Joaquín Balaguer, tradicional líder conservador, vuelve al poder por sexta ocasión, convirtiéndose en el presidente dominicano que más veces ha alcanzado el solio presidencial en la historia republicana del país.

La paradoja de la situación política creada con estos resultados electorales raya en lo grotesco: el partido de Juan Bosch, el PLD, fue la única organización política que en la contienda electoral tuvo un incremento real y significativo de su porcentaje de votos, en relación con las anteriores elecciones, pasando así de concentrar 387 881 votos en 1986, a reunir 647 038 en 1990. En cambio, el partido oficialista de Balaguer, el PRSC, vio descender su votación en 217 802 votos, lo que representa una caída del orden del 20% en relación a las elecciones de 1986. Más aún, como organización política independiente el PRSC obtuvo una votación por debajo de la alcanzada por el PLD,<sup>1</sup> resultando de ello una embarazosa situación, ya que el

\* Sociólogo dominicano. Especialista en sociología política y del desarrollo. Director de la FLACSO-República Dominicana.

<sup>1</sup> Balaguer logró el triunfo gracias a sus aliados. Como partido independiente el PRSC de Balaguer obtuvo 637 763 votos (33.3%), contra 647 038 votos (33.8%) del PLD.

partido que consiguió la mayoría relativa (el PLD) perdió las elecciones presidenciales. Todo esto sin tomar en consideración el clima de irregularidades flagrantes en que se desenvolvió el proceso electoral, lo cual pone en entredicho la limpieza de la contienda electoral y consecuentemente la legitimidad política de sus resultados.<sup>2</sup>

¿Cómo explicar estos resultados electorales? ¿Cómo afectarán el cuadro de fuerzas políticas nacionales? Lo que es más importante quizás: ¿pone en cuestionamiento las bases del tradicional sistema político de tono populista en torno al cual, durante veinte años, se ha organizado la vida política dominicana? ¿Ha llegado la hora de la modernización política dominicana que haga de la participación ciudadana un ejercicio pluralista y democrático? ¿Llega con estas elecciones a su fin la hora de los caudillos tradicionales? El presente artículo intenta plantear ciertas consideraciones que arrojen luz sobre las interrogantes presentadas.

## 2. LAS ELECCIONES DOMINICANAS DE 1990 Y LA CRISIS DEL SISTEMA POPULISTA

Los analistas del sistema político dominicano y en particular los estudiosos de los procesos electorales, convienen en admitir que las elecciones de 1990 agotan un "ciclo histórico" en la tradición política dominicana. Convergen en esta idea en la medida en que reconocen que con las elecciones de 1990 prácticamente se agotan las posibilidades del protagonismo político de los dos grandes líderes que han presidido los últimos veinticinco años de vida política dominicana: Juan Bosch y Joaquín Balaguer. Para ambos líderes, mayores de ochenta años de edad, es prácticamente imposible, por simples razones biológicas, presentarse de nuevo como candidatos en las próximas elecciones de 1994. Según esta óptica de análisis, con la desaparición de estos dos grandes líderes, llegaría a su fin el largo ciclo de la política caudillista en el país, cuyos orígenes pueden reconocerse en el inicio mismo de la tradición republicana, a mediados del siglo XIX.<sup>3</sup>

Nuestra interpretación reconoce que las elecciones de 1990 representan un significativo cambio en la dinámica del proceso político dominicano, pero entiende que ello no es tanto consecuencia del agotamiento del sistema caudillista (tras el potencial ocaso de sus dos principales representantes nacionales contemporáneos), como resultado de la crisis de una forma de Estado y de un sistema de relaciones políticas que fue consecuente con éstos que calificaremos de populistas.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Las irregularidades del proceso electoral fueron múltiples: compra de carnets electorales a simpatizantes de la oposición, sobre todo del PLD y del PRD; fallas, errores y "omisiones" en los registros y conteos en las mesas electorales; doble exposición de cédulas de identidad y de carnets electorales, etcétera.

<sup>3</sup> Campillo Pérez, Julio, *Historia electoral dominicana*, Junta Central Electoral, Ed. Corripio, Santo Domingo, 1986.

<sup>4</sup> Asumimos el populismo como un sistema de relaciones políticas, articulado

Vistas de esta manera, las elecciones de 1990, tanto en su desarrollo como en sus resultados, ponen en tela de juicio los mecanismos tradicionales de arriba a la legitimidad, propios del sistema populista.

La crisis del populismo en el país se desencadenó a mediados de la década de los ochenta, en el segundo gobierno del PRD presidido por Salvador Jorge Blanco. Lo ocurrido fue producto de complejos factores, el principal de los cuales, sin duda, fue la incapacidad del Estado para sostener la política de masas populista, apoyada en el clientelismo, el financiamiento de los costos salariales indirectos de amplios estratos obreros, y los subsidios a importantes rubros constitutivos del esquema de reproducción global de las familias trabajadoras, tales como la educación pública, el transporte colectivo, la salud, etcétera. En ello intervino ciertamente la crítica situación en que se vio inmerso el país, tras la crisis de la deuda y la política de ajuste auspiciada por el FMI, a partir de 1982. Sin embargo, también pesó la pérdida de la capacidad estatal para regular las formas de articulación del país con el sistema mundial, tras la reconversión de su economía. La economía dominicana pasó así de ser típicamente exportadora, a convertirse, tras el desarrollo del turismo y las zonas francas,<sup>5</sup> en productora de servicios y mano de obra barata para el capital internacional.

Las transformaciones de los años ochenta impusieron así una nueva modalidad de articulación con el sistema mundial. Ello, a su vez, determinó el reacomodo de los vínculos del Estado con las clases dominantes, pero sobre todo con las clases trabajadoras. Se produjo de esta forma, una transformación de la matriz estatal en su capacidad de conducción del proceso de desarrollo capitalista, de gestión del proceso de reproducción social de las clases trabajadoras, y de mediación y organización del orden sociopolítico. Fue así que la crisis de los ochenta puso en cuestionamiento la forma política asumida por el Estado en su función articuladora y cohesionadora de la sociedad civil y política.

De la crisis de los ochenta a nuestros días se fue constituyendo un modelo de desarrollo alternativo al industrial sustitutivo de importaciones, el cual se organizaría en torno a la actividad turística, las zonas francas y la actividad financiera. Bajo tales condiciones se rearticularía la posición del país en el sistema internacional, al tiempo que se redefiniría el escenario clasista nacional.

en torno a interpelaciones ideológicas de tipo popular-democráticas movilizadoras del "pueblo", como sujeto político activo. El sistema incluye tres elementos: 1) un sistema de relaciones entre el Estado y las masas de tipo prebendario; 2) un esquema clientelista de movilización popular, y 3) una ideología popular-democrática que identifica a los principales actores: el pueblo, el líder, la oligarquía, el bloque dominante, etcétera. Véase a Laclau, Ernesto, *Política e ideología en la teoría marxista*, Siglo XXI Eds., México, 1980.

<sup>5</sup> Lozano Wilfredo, *Trabajadores, poder y populismo: la lucha por la participación social y la política de masas del populismo en República Dominicana*, Starnberg Institut (mimeo), 1989.

De estos cambios socioeconómicos saldría fortalecida la burguesía financiera, asumiendo la hegemonía del modelo de acumulación. Sin embargo, también las propias clases trabajadoras sufrirían notables transformaciones, ya que se debilitaría el poder del proletariado industrial, fortaleciéndose social y políticamente un nuevo proletariado informal urbano. Por lo demás, se expandiría una "nueva" clase obrera en torno a las zonas francas, con una elevada participación femenina, al tiempo que se agudizaría el éxodo de fuerza de trabajo dominicana hacia Estados Unidos y la inmigración de fuerza de trabajo haitiana hacia el país.

### 3. LA DINÁMICA ELECTORAL DEL SISTEMA POPULISTA

En el tradicional sistema populista dominicano, durante el largo período comprendido entre 1961 y 1986, las elecciones generales operaron como un mecanismo determinante para el ejercicio de la hegemonía política. Por sus consecuencias, se erigieron en el principal vehículo de movilización de masas y, como tal, en el más importante canal de representación ideológico-política.

En los hechos, las elecciones tenían efectos positivos en la capacidad de las masas para presionar al Estado, a fin de lograr la instrumentación de políticas económicas específicas, sobre todo en lo relativo a los subsidios estatales, los planes de reforma agraria de los años setenta y, en general, en lo relativo a las políticas salariales directas o indirectas.<sup>6</sup> Por ello produjeron la ilusión de una "participación de masas" en las grandes decisiones de Estado. Asimismo, las elecciones entrenaron a las masas en la práctica del clientilismo, tras la cual se daba la modalidad concreta de cooptación prebendaria del sistema político, sobre todo de sus caudillos protagónicos; en una palabra, las elecciones "socializaron" a las masas en la práctica populista. Por todo ello, en el período 1961-1990 las elecciones se volvieron el espacio ideal para la concertación, en el "territorio" predilecto de la legitimación política del sistema populista.

Pese a que la práctica populista reconoce como uno de sus ejes articuladores el policlasismo de la representación, en el período de "plenitud" del sistema populista (1961-1986) se definieron dos bloques de fuerza político-electoral con un claro condicionante clasista en su representación.

Los actores sociales emergentes, producto del proceso de industrialización sustitutiva de importaciones y del consecuente proceso de urbanización que le acompañó en las décadas de 1960 y 1970, rearticulaban la vida de las ciudades en el plano político. Con ello surgió una clase obrera urbana que aunque exigua en número era políticamente muy beligerante. Nació y se desarrolló una influyente clase media que aportó los cuadros directivos del sistema político y los cuadros técnicos e ideológicos del Estado como de la naciente burguesía industrial y financiera. Finalmente, con el creci-

<sup>6</sup> Lozano, Wilfredo, *El reformismo dependiente*, Ed. Taller, Santo Domingo, 1985.

miento de las ciudades surgía un sector marginal, cada vez más importante en el plano demográfico y determinante en el político. Fue en estos sectores donde el PRD encontró su clientela política, constituyéndose en el representante político de las fuerzas sociales que nacían con la industrialización y el desarrollo dependiente.

En cambio, las fuerzas y sectores sociales más vinculados a la sociedad rural "tradicional" pero en proceso de transformación, tales como el campesinado minifundista, la burguesía agraria, los estamentos burocráticos estatales, la pequeña burguesía urbana vinculada al comercio y a la pequeña producción, así como el emergente empresariado protegido por el Estado, reconocieron su espacio de representación en Balaguer y su Partido Reformista.

Ello dio pie a una tradición electoral bipolar, en la que dos grandes partidos políticos se repartían el grueso del electorado: el PRD y el Partido Reformista. Sin embargo, debemos distinguir dos etapas claramente diferenciadas en la historia electoral dominicana contemporánea. En primer lugar, hay que reconocer el período que cubre las cuatro elecciones celebradas entre 1961 y 1974 (en 1961, 1966, 1970 y 1974). En dicho lapso, salvo el efímero gobierno de Bosch en 1961, el Estado estuvo bajo el directo control oligárquico (1961-1965) o balaguerista (1966-1978), tras la alianza bonapartista de base campesina, fraguada entre Balaguer, la oligarquía comercial-terrateniente tradicional y el empresariado industrial-financiero que comenzaba a surgir.<sup>7</sup>

En este período, el PRD y las fuerzas populares urbanas estuvieron excluidas de una efectiva participación y representación estatal, dado el esquema bonapartista de semidictadura legal que caracterizó a los gobiernos balagueristas.

En las elecciones de 1966 triunfó Balaguer con el apoyo abierto de las fuerzas de intervención estadounidenses que aún permanecían en el país después de la contienda bélica de 1965. En 1970 el PRD se abstuvo de participar en las elecciones. En 1974, tras la salida de Bosch de este partido un año antes y el fracaso del Acuerdo de Santiago en 1974, el PRD también decidió abstenerse de participar en la contienda electoral.<sup>8</sup> Sólo en 1978 el PRD participaría de nuevo en las elecciones después de su derrota de 1966, consiguiendo el triunfo. Con ello se inauguraba la segunda etapa de la historia electoral dominicana contemporánea.

Las elecciones de 1978 no sólo desplazaron a Balaguer del poder sino que, dado el esquema autoritario y bonapartista, característico del ejercicio del poder en los gobiernos balagueristas del período 1966-1978,<sup>9</sup> también sentaron las bases para un proceso de "transición democrática". Las elec-

<sup>7</sup> *Idem.*

<sup>8</sup> Campillo Pérez, J., *op. cit.*

<sup>9</sup> Espinal, Rosario, *Autoritarismo y democracia en la política dominicana*, Centro Interamericano de Asesoría y Promoción Electoral, San José, Costa Rica, 1987.

ciones de 1978 cambiaron algunas de las pautas tradicionales del comportamiento electoral dominicano. En primer lugar, revelaron una escisión profunda en la base de apoyo campesino del balaguerismo, parte de la cual votó por el PRD. En segundo lugar manifestó la división de la clase media urbana, tradicional respaldo de Balaguer, parte de la cual también votó por el PRD. Asimismo, permitió reconocer que en las clases dominantes también se había manifestado la división y que el apoyo del propio ejército a Balaguer ya no era monolítico. En una palabra, el triunfo electoral del PRD en 1978 se apoyó en la ruptura de la unidad de las fuerzas sociales tradicionalmente alineadas con Balaguer.<sup>10</sup>

Bajo los gobiernos del PRD, el deterioro de la capacidad reguladora del Estado comenzaría a manifestarse en toda su desnudez y dramatismo. La política económica perredista en 1978-1982 con A. Guzmán como presidente, se propuso dinamizar la economía a través de un programa de corte keynesiano de estímulo a la demanda, a través del aumento del gasto corriente del Estado y el significativo incremento de los salarios. En las condiciones de crisis del modelo de expansión basado en la sustitución de importaciones y el constreñimiento del eje exportador, pronto dicho modelo estimuló una grave crisis fiscal, que no tuvo otra respuesta que el endeudamiento externo acelerado. Con ello, el fantasma de la inflación aparecería en escena, provocando que empresarios y sindicatos entraran en abierto enfrentamiento con el gobierno.<sup>11</sup>

A esto se sumó una aguda crisis interna del partido en el gobierno. En estas condiciones se llevaron a cabo las elecciones de 1982, nuevamente ganadas por el PRD con Salvador Jorge Blanco como candidato. El gobierno inaugurado por Jorge Blanco evidenció, desde sus inicios, una gran precariedad en el equilibrio de fuerzas que lo sostenía, pese a haberse logrado un gran respaldo del empresario y de las clases medias urbanas.<sup>12</sup>

Desde el principio, la estrategia jorgeblanquista se propuso distanciar la gestión de gobierno de la influencia del partido. En la práctica, esto produjo una ruptura importante entre la base de masas del gobierno localizada en gran medida en el PRD con su aparato burocrático gubernamental. Por lo demás, el diseño de política económica de Jorge Blanco fue abiertamente neoliberal. A tenor del acuerdo con el FMI, la política económica gubernamental se colocó en las antípodas de la de su predecesor: se propuso constreñir el gasto público, liberalizar la tasa de cambio, reducir las emisiones de dinero inorgánico en las que se apoyaba parte de la política de financiamiento del gasto público, al tiempo que limitaba la inversión local,

<sup>10</sup> Oviedo, José, *Estado, reestructuración y crisis en República Dominicana*, Universidad Autónoma de Santo Domingo, 1984.

<sup>11</sup> Ceara Hatton, Miguel, *Tendencias estructurales y coyuntura de la economía dominicana, 1968-1983*, Fundación Friedrich Ebert, Santo Domingo, 1984.

<sup>12</sup> Oviedo, José, *op. cit.*

medidas todas que sirvieron para estimular el crecimiento de la actividad financiera y especulativa, con las consecuencias recesivas previsibles.

El costo social de estos ajustes fue muy alto. En las condiciones de deterioro de la base de masas del gobierno, las medidas provocaron una serie de protestas sociales, la principal de las cuales fue la revuelta de abril de 1984, cuyo saldo trágico que fue de más de 100 muertos, miles de detenidos y cientos de heridos. En estas condiciones, el gobierno no sólo quedó aislado, sino que su capacidad de hegemonía se hacía añicos, al tiempo que el sistema partidario entraba en una aguda crisis de legitimidad.<sup>13</sup>

Fue en ese momento que Balaguer vuelve de nuevo al poder triunfando fácilmente sobre un PRD dividido internamente y desprestigiado ante las masas. Tras su retorno al poder en 1986, Balaguer intentaría restablecer la capacidad de legitimación del sistema político puesta en entredicho con el fracaso de los dos gobiernos perredistas de 1978-1982 y 1982-1986. Sin embargo, las nuevas condiciones sociales y políticas del país conducirían al viejo caudillo conservador a definir un esquema de mando político muy distinto del estilo autoritario, propio de las condiciones de semidictadura bonapartista, con el que había gobernado al país durante los doce años que van de 1966 a 1978.

La pérdida de la legitimidad política del Estado ante las masas, producto de la política populista del PRD, a su vez, conduciría a Balaguer a la definición de una estrategia política de reconstitución "moral" del Estado frente a la sociedad civil. Con ello, tras la campaña moralizadora del gobierno en su primer año (que puso en el banquillo de los acusados al propio ex presidente Jorge Blanco), Balaguer intentaba ganar espacio político frente a la oposición perredista, restándole espacio de maniobra. Sin embargo, también es cierto que la campaña era una respuesta a la crisis global del Estado ante la sociedad civil (y que produjo la derrota del PRD en 1986), así como al cuestionamiento del sistema partidario por parte del movimiento de masas, con lo cual el sistema político enfrentaba un agudo problema de legitimidad.

La estrategia de Balaguer, dado su tradicional diseño bonapartista, lejos de potenciar la consolidación institucional del Estado, robusteció el ya creciente proceso de corporativización de la sociedad civil y el presidencialismo. Con ello, ante la crisis de legitimidad del conjunto de partidos políticos tradicionales, se fortalecía la función cesarista del propio Balaguer, desplazando a los partidos de su rol de arbitraje entre los diversos grupos de la sociedad civil y el Estado. Balaguer aparecía así como el César mediador de los nuevos movimientos sociales frente al gobierno, del sin-

<sup>13</sup> Lozano, Wilfredo y Otto Fernández, "La democracia inútil: informalidad urbana y protesta social en República Dominicana en los ochenta", Seminario sobre *Sector informal y movimientos sociales en la cuenca del Caribe*, FLACSO-Dominicana y Social Sciences Research Council, Santo Domingo, 1990.

dicalismo tradicional frente a los patrones y, en general, de la sociedad civil frente al Estado.<sup>14</sup>

En un principio, las clases dominantes apoyaron con entusiasmo este diseño estratégico, sobre todo cuando hacían un recuento de sus éxitos en el control del movimiento popular, el cual amenazaba con constituirse en una fuerza política incontrolable, más allá de los partidos tradicionales y del movimiento sindical.

Sin embargo el maridaje duró poco, al igual que la capacidad de Balaguer para controlar el conflicto social, en su modalidad cesarista. En esta ocasión, la ruptura sobrevino debido a la política económica del gobierno: en el período 1986-1990 la crisis económica del país llegó a magnitudes tales que impidió al Estado cumplir con los compromisos internacionales para el pago de la deuda pública. Con ello, si bien el Estado dejaba de drenar recursos hacia el exterior, también se enajenaba la posibilidad de concertar acuerdos que le permitieran una inyección masiva de dólares con los cuales financiar los grandes desequilibrios de la balanza de pagos y la crisis fiscal, sin la necesidad de recurrir al financiamiento con dinero inorgánico.

En tales condiciones, Balaguer se negó a firmar un acuerdo con el FMI. Sin embargo, su política económica no planteó una restricción de la inversión que atacara con eficacia el desequilibrio fiscal. Por el contrario, más bien estimuló un millonario plan de inversiones en obras públicas, financiado con recursos locales que, a la larga, se constituyó en el principal detonador de la inflación. A todo ello se unió el creciente deterioro de los servicios estatales (como la crisis energética y del transporte colectivo).

En este punto el gobierno balaguerista entró en un abierto conflicto con el empresariado, sobre todo con su fracción hegemónica ligada a la banca, el turismo y las zonas francas, siendo el eje del conflicto la regulación de la tasa de cambio y la política monetaria del gobierno. Habría que subrayar que lo que se debatía eran los términos mismos de la repartición del excedente en las nuevas condiciones de acumulación transnacional del capital.

Por el lado del movimiento popular, Balaguer encontraba cada vez más dificultades para continuar representando exitosamente su papel de árbitro cesarista. Sin embargo, en tales condiciones, el PRD como partido de masas entró en un abierto deterioro y crisis interna, al tiempo que el PLD emergía como una alternativa partidaria al PRSC de Balaguer y al propio PRD. Con el surgimiento del PLD como espacio político alternativo a los grandes partidos de masas tradicionales y la activación de nuevos movimientos sociales urbanos, se sentarían las bases para un profundo cuestionamiento del sistema político tradicional.

<sup>14</sup> Lozano, Wilfredo, "Balaguer, 1986-1987: una nueva legitimidad política", en *Estudios Sociales*, año XX, (67) 87, enero-marzo.

#### 4. REACOMODO POLÍTICO Y ELECCIONES

Desde su retorno al poder en 1986, la estrategia balaguerista fue muy clara. El eje sobre el cual se articulaba era la división de la oposición política, sobre todo del PRD. En primer lugar, Balaguer detuvo por cargos de corrupción al ex presidente Jorge Blanco y a sus principales colaboradores; segundo, estimuló la disputa interna entre las principales facciones del PRD (la liderada por Jacobo Majluta y la liderada por Peña Gómez). El resultado fue que la lucha de facciones prácticamente anuló la capacidad de acción política del PRD frente al gobierno. En condiciones de crisis interna y de profundo descrédito ante la sociedad civil, el PRD perdió durante esos cuatro años de gobierno balaguerista (1986-1990) su tradicional ascendente sobre las masas.

El correlato político de esta situación fue el ascenso del PLD como principal partido de oposición. Éste dispuso como estrategia ganar el espacio de masas que el PRD dejaba vacío, ratificando así el expediente de la corrupción que justamente se había abierto contra la facción jorgeblanquista. En tal contexto, el PLD inició una tímida oposición al gobierno. Sin embargo, pese a ello, en la medida en que la política económica del gobierno fracasaba, el PRD perdía espacio de masas, el empresario entraba en contradicciones con el gobierno y las clases medias se depauperaban, el PDL expandía su influencia, no sólo en las filas de las clases trabajadoras, sino también entre las clases medias, el empresariado y el campesinado. De esta manera, este partido se convertía en la principal organización política de oposición, desplazando al PRD.

En ese momento, el PLD encontró espacios de legitimación y aceptación entre las clases dominantes, sobre todo en la fracción industrial de la burguesía media, pero también frente al gran capital bancario y en los grupos financieros que controlaban el turismo. Sin embargo, no hay que perder de vista que durante tres años (1986-1989), los procesos que finalmente rearticulaban al cuadro político dominicano favorecieron la estabilidad del gobierno balaguerista acallando la capacidad cuestionadora de la oposición política en su conjunto.

En esta situación, el crecimiento del PLD no impidió la pérdida de credibilidad del sistema de partidos frente a la sociedad civil. Se fortalecieron así nuevos movimientos sociales, los cuales lograron movilizar a importantes sectores populares urbanos en torno a programas reivindicativos eminentemente territoriales, pero que contribuyeron al surgimiento de un nuevo liderazgo de base popular, precisamente ante el vacío de hegemonía producido por la crisis de los partidos. A ello se une el fortalecimiento de las tendencias corporativas que el propio gobierno estimulaba como parte de su estrategia de anulamiento político de los grandes partidos de masas (PRD y PLD), y el fortalecimiento del papel bonapartista de Balaguer ante los grupos de interés de la sociedad civil.

La crisis del sistema de partidos fortaleció así una tendencia corporativa y de movimientos en la sociedad civil. Estos nuevos movimientos sociales nacían al tiempo que se ampliaba el espacio de acción de los aparatos corporativos del empresariado, principalmente del Consejo Nacional de Hombres de Empresa (CNHE), y de la Asociación de Industriales de Herrera.

La participación del empresariado en la vida pública dominicana no era nueva. Lo novedoso fue que el corporativismo empresarial trataba ahora de cubrir el vacío de hegemonía creado por la crisis de partidos, como en su contexto lo hacían los nuevos movimientos sociales urbanos.

Como se aprecia, las elecciones de mayo de 1990 se sitúan en el campo de rearticulaciones entre el sistema partidario, el Estado y la sociedad civil que desde 1980 se estaban produciendo en el país. Naturalmente, con esto no queremos afirmar que el reacomodo clasista así producido pudiera derivarse de un oculto y sospechoso determinismo impuesto por las "condiciones objetivas" que explicaría en "primera instancia" lo político, desconociendo así la especificidad de los procesos electorales.

Sin embargo, sí creemos que los resultados de las últimas elecciones de mayo han puesto en entredicho las formas de representación política propias de la tradición populista, al romper la bipolarización característica de los procesos electorales dominicanos, desde la muerte de Trujillo, en 1961, hasta la fecha. De aquí que pueda afirmarse que estas últimas elecciones generales, como momento significativo de la representación política y por sus resultados específicos, han cuestionado las formas tradicionales de constitución de la hegemonía propias del Estado clientelista.

## 5. LA CAMPAÑA ELECTORAL

En este cuadro político se inicia la campaña electoral de 1990. El PRD, profundamente dividido en su interior, no logró reorganizarse sino unos meses antes de las elecciones, cuando Jacobo Majluta decide abandonar al partido y constituir otra organización política, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con lo que Peña Gómez quedó como el líder indiscutible de la organización. Sin embargo, para los fines estrictamente electorales, con esta división el PRD y el PRI quedaban anulados como alternativas electorales y, por consiguiente, el PLD aparecía como la alternativa natural al reformismo balaguerista.

El partido de gobierno también sufrió serios reveses en su interior, que, sin embargo, no culminaron con la división. La principal disidencia la planteó la facción liderada por Fernando Álvarez Bogaert, quien en la pre-campaña se postuló como candidato a la presidencia contra Balaguer. Aunque fracasó en su intento, la facción fernandista del PRSC demostró tener un gran ascendente en la dirigencia media del reformismo, sobre todo en la región del Cibao, tradicional bastión reformista, facción que su-

friría una aplastante derrota en las principales provincias (Santiago, La Vega, San Francisco de Macoris y Puerto Plata).

El único partido que acudió a las elecciones con una gran unidad interna y coherencia de propósitos estratégicos fue el PLD, cuyo candidato indisputable fue siempre Juan Bosch. No hubo asomos públicos ni divisiones internas y su discurso político mantuvo siempre una gran congruencia.<sup>15</sup>

¿Cómo se expresó la crisis de legitimidad del sistema de partidos en la dinámica electoral misma? El primer aspecto que se destaca es la "desideologización" del discurso político de los principales actores que participaron en el certamen electoral. No deja de constituir una paradoja que esto se expresara en partidos que como el PRD y el PLD hacían del nacionalismo (ambos) y del antiimperialismo (sobre todo el segundo) componentes esenciales de la propuesta ideológica para la movilización de su militancia. Las consecuencias fueron claras: todas las propuestas electorales eran inmediatistas, pragmáticas y evadían los planteamientos directos que atacaran de frente los grandes problemas nacionales. Sin embargo, no por pragmáticas lograron definir, en ninguno de los actores políticos, planes específicos para enfrentar los problemas más agudos y relevantes, no sólo desde el punto de vista técnico y económico, sino también social y político.

Irónicamente, lo que en la práctica ocultaba la disideologización del discurso político era la fuerza ideológica, en las condiciones del país había adquirido el discurso neoliberal sobre el conjunto de los actores políticos electorales.

En este contexto, la pérdida de legitimidad del sistema partidario y su falta de propuestas hegemónicas alternativas fortaleció la capacidad mediadora de aparatos de Estado como la Iglesia católica, pero sobre todo, permitió a la fracción financiera y turística de la burguesía, agrupada en el CNHE tomar la iniciativa política, colocando a los partidos de masas bajo su dirección ideológica y programática.

Ya desde fines de marzo, en un importante documento dado a la luz pública por el CNHE, el empresariado fijaba una posición crítica frente a la política económica estatal, ratificada durante la Convención de Hombres de Empresa en abril.<sup>16</sup> Tanto el primer documento como las resoluciones de la Convención ponían en evidencia que la propuesta de reordenamiento neoliberal era hegemónica en el alto mando del empresariado y que, en general, esta orientación era aceptada en amplios sectores empresariales, aun cuando el grupo de industriales de Herrera manifestaba su

<sup>15</sup> Cordero, Margarita, "Fundamentos y características de la campaña del PLD", *El Siglo*, 12 de mayo de 1990.

<sup>16</sup> La publicación del Documento del Consejo Nacional de Hombres de Empresa apareció en el *Listín Diario*, 29 de marzo de 1990. Las Resoluciones de la Convención Nacional de Hombres de Empresa aparecieron en el suplemento cultural *Realidad*, núm. 39 del periódico *El Siglo*, 5 de abril de 1990.

desacuerdo. En la serie de participaciones que los principales candidatos (Peña Gómez, Bosch, Jacobo Majluta y Balaguer) hicieron en los almuerzos de la Cámara Americana de Comercio, se hizo evidente la hegemonía empresarial sobre la propuesta programática de la oposición.<sup>17</sup>

Sólo Balaguer y Majluta defendieron la permanencia de las empresas estatales, una política económica keynesiana que justificaba, en última instancia, la política monetaria de emisiones inorgánicas y en general, el peso del intervencionismo estatal en la economía y la sociedad. Sin embargo, Peña Gómez y sobre todo Juan Bosch expresaron la adopción de los principales puntos defendidos por el empresariado neoliberal.

Mas allá del contenido programático de dicha posición, lo que resultó claro fue la ruptura casi total que existía entre el empresariado y el gobierno, en materia de política económica, pero sobre todo reveló un profundo desacuerdo en lo relativo al papel que debería desempeñar el Estado en el nuevo modelo de acumulación que se articulaba y expandía, en base al turismo y las zonas francas. Por otro lado, destacó la estrategia empresarial en el plano político: al ganar la batalla programática con el PRD y el PLD, el empresariado aseguraba que de triunfar la oposición, cualquiera que fuera el ganador (Peña Gómez o Bosch), el programa económico que se impulsaría parcial o totalmente desde el Estado sería el suyo: el de la burguesía financiera.

Fue así que el empresariado logró el compromiso programático tras lo cual la oposición, pero sobre todo el PLD, acogería muchos puntos del programa neoliberal propuesto por la fracción hegemónica de la buurguesía financiera, como parte del programa anticrisis. Por otra parte, el compromiso también implicó el abandono de la política populista de masas que reconocía en el fortalecimiento del Estado el principal vehículo de la estrategia "redistributivista" característica de las políticas económicas de los sucesivos gobierno populistas, tanto en su expresión conservadora (bajo el reformismo balaguerista), como radical y movimientista (tras los gobiernos del PRD).

El discurso político electoral del PLD señalaba que la crisis por la que atravesaba la República Dominicana era en definitiva producto de la "mala administración" del Estado por parte de la burocracia balaguerista, pero sobre todo del propio Balaguer.<sup>18</sup>

Así pues, para el PLD, se trataba de una crisis de orden, traducida en crisis administrativa del Estado. Sin embargo, la propuesta del PLD no contemplaba que la crisis administrativa era la expresión de la crisis de una forma de Estado de corte populista, mediatizada por la fuerza carismática

<sup>17</sup> Félix Calvo presenta un interesante resumen crítico de las posiciones del PLD y del PRD en materia de política económica en su ensayo: "El futuro económico dominicano a través de los programas de los partidos: el caso del PRD y el PLD", en *Realidad*, núm. 44, *El Siglo*, jueves 10 de 1990.

<sup>18</sup> El discurso de Juan Bosch en la Cámara Americana de Comercio se publicó en *El Nuevo Diario*, 5 de abril de 1990.

de Balaguer, no generada por la simple presencia de su figura al frente del gobierno, aunque sí potenciada por el resultado negativo de su última gestión gubernamental. Por ello, si bien el planteamiento peledista admitía que cualquier propuesta coherente frente a esta crisis estatal y societal implicaba reconocer la necesidad del reacomodo de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil, no aclaraba cómo se orientaría la práctica estatal para producir dicha rearticulación.

El PLD sostenía que la forma de atacar la inflación galopante era a través de los mecanismos para el establecimiento de precios en la economía, uno de cuyos componentes era, precisamente, la emisión monetaria, y las distorsiones introducidas por el proteccionismo estatal. No obstante el PLD no explicaba cómo se enfrentarían las consecuencias políticas de esta estrategia económica. Algo semejante ocurría con la privatización de las empresas estatales. Se planteaba su venta, pero no se aclaraba en modo alguno en qué situación quedarían sus trabajadores, cuestión que traería importantes consecuencias políticas frente al movimiento sindical. La propuesta misma de industrialización que se sugería chocaba con el modelo de expansión hacia el exterior a través de las zonas francas y el turismo, que sostenía la fracción hegemónica de las clases dominantes. De todos modos, lo importante es reconocer que tras la propuesta de orden de la sociedad civil y de modernización del Estado, el PLD recogía la necesidad de un nuevo esquema de legitimación como requisito de la nueva idea de hegemonía social y política que el reformismo balaguerista hizo suya tras la crisis de los gobiernos populistas del PRD entre 1982-1986. Irónicamente el marco ideológico de este planteamiento reconocía en su base programática las tesis neoliberales.

Debe reconocerse que la propuesta programática de Peña Gómez y el PRD expresaba una mayor capacidad de modernización política, a través de la búsqueda de nuevos esquemas de concertación y participación sociales y en lo relativo a la venta de las empresas estatales adoptó una posición corporativista.<sup>19</sup> Aun cuando también hizo suyos muchos de los planteamientos del empresariado neoliberal, fue mucho más claro que las otras organizaciones en la exposición de los mecanismos de control de la inflación, sin por ello abandonar su posición socialdemócrata en materia de regulación estatal y participación popular.

En cambio, Balaguer se mantuvo dentro de su tradicionalismo neopopulista y conservador.<sup>20</sup> En la mejor tradición populista, apeló al vínculo protector del Estado con las masas en el contexto de una aguda crisis estatal que, precisamente, limitaba su capacidad como agente regulador de

<sup>19</sup> Peña Gómez, José Francisco, "La modernización política, económica y social del Estado dominicano" (discurso ante la Cámara Americana de Comercio), en *El Nuevo Diario*, 19 de abril de 1990.

<sup>20</sup> El discurso de Joaquín Balaguer ante la Cámara Americana de Comercio se publicó en *El Nuevo Diario*, 3 de mayo de 1990.

la economía y financiador de los costos reproductivos de las clases trabajadoras. En el fondo, el discurso programático balaguerista se limitó a defender su política económica, sobre todo en su expresión monetaria, fiscal y de inversiones.

## 6. LOS RESULTADOS ELECTORALES

Con las elecciones de mayo de 1990 se rompe el patrón histórico de bipolarización partidaria. Durante veinte años, en seis contiendas electorales, el PRD y el Partido Reformista se repartieron más del 80% del electorado, constituyéndose así en las fuerzas político-electorales hegemónicas.<sup>21</sup> Como ya lo hemos analizado, en el contexto de la política populista la bipolarización funcionaba como uno de los requisitos básicos de la legitimidad del sistema político, facilitando así la constitución de una mayoría electoral. Este esquema de movilización de masas ha muerto, agudizando con ello la pérdida de legitimidad de los tradicionales partidos de masas.

La nueva situación es compleja y múltiple. Por un lado, ha permitido el surgimiento del PLD como partido de masas que concentra la mayoría del electorado; por otro, revela el nacimiento de nuevos movimientos sociales, no hegemonizados por los partidos, pero con un ascendente político cada vez mayor sobre amplios sectores populares. Ello ha dado lugar a una nueva situación en la que ninguno de los partidos de masas tradicionales (incluido el PLD) puede aspirar por sí solo a la representación mayoritaria de las masas.

En este contexto, los resultados electorales, más allá de las irregularidades y evidencias de fraude, revelan que el PLD obtuvo el 33.8% de los votos presidenciales, 32.2% de los congresionales y el 32% de los municipales, con lo cual consiguió como partido una ligera mayoría sobre el PRSC. Esto le ha permitido controlar alrededor del 60% de los municipios y la Cámara de Diputados (cuadro 5). Sin embargo, el PLD perdió las elecciones presidenciales, mientras el control del Senado permanece en manos reformistas.

El caso del reformismo balaguerista es exactamente el inverso: su votación descendió en más de 200 mil votos, en relación a las elecciones de 1986 (cuadro 2) y como partido independiente obtuvo menos votos que el PLD. Sin embargo, sus aliados (PLE, PQD, PNVC y PDI) le permitieron ganar las elecciones presidenciales superando al PLD por un escaso margen de 1.6%. El corolario de esta nueva situación es el desplazamiento del PRD como fuerza política mayoritaria y su constitución en "tercera fuerza", con aproximadamente 23% del voto (cuadro 4).

De cualquier manera, puesto que el PLD y el PRSC controlan el 36%

<sup>21</sup> Duarte, Isis y Clara Báez. "Geopolítica electoral 1978-1986: características y tendencias", en suplemento *Realidad*, núm. 43, *El Siglo*, jueves 3 de mayo de 1990.

y el 34% de la Cámara de Diputados respectivamente, la formación de la mayoría parlamentaria en la cámara baja obliga a contar con el voto del PRD. Como podemos apreciar, la reconstitución de las "mayorías", que las elecciones de mayo de 1990 han puesto al desnudo, augura una difícil situación en la dinámica de la concertación política, tanto en la dimensión propiamente congresional, como partidaria, puesto que ninguno de los partidos de masas puede apelar en tales circunstancias a una representatividad mayoritaria del electorado.

El segundo elemento que las elecciones de 1990 pone al desnudo es el incremento del abstencionismo, el cual se estima en alrededor del 40% del electorado inscrito (cuadro 1). Desde 1974 no se había observado en los procesos electorales dominicanos una proporción tan alta de abstención: en dicho año se elevó al 47.6%, lo cual es explicable en función de la ausencia del PRD del proceso electoral, tras la desarticulación del Acuerdo de Santiago.<sup>22</sup> En cambio, los tres procesos electorales subsiguientes (1978, 1982 y 1986) tuvieron una alta participación del electorado inscrito, ya que en promedio la abstención apenas alcanzó un 26.5% (cuadro 1).

Los procesos electorales aludidos expresan realidades políticas disímiles. Las elecciones de 1978 permitieron el ascenso al poder del PRD, al derrotar masivamente al reformismo balaguerista. Las elecciones de 1982, pese a la ya evidente crisis del sistema populista, de nuevo propiciaron la victoria del PRD, mientras que las elecciones de 1986 marcaron la salida del poder de este partido y la vuelta de Balaguer al control del Estado. Sin embargo, en las tres elecciones las masas tuvieron una gran participación y los partidos tradicionales mantuvieron su capacidad de movilización popular. Las elecciones de 1990 rompen ese patrón, al elevarse el abstencionismo a un 40%.

Mientras que en 1974 la abstención fue en gran medida el resultado de una decisión política (el llamado a no votar por el PRD), en 1990 es fruto de una crisis de representación, en la que amplios sectores de masas ya no reconocen la credibilidad a los partidos tradicionales, ni se sienten representados por éstos.

En 1990, la abstención puede considerarse también como resultado de las transformaciones que la sociedad dominicana ha sufrido en los últimos años. De nación tradicionalmente exportadora de bienes primarios, el país pasó a constituirse en una economía terciaria que proporciona mano de obra barata para el capital transnacional y que exporta servicios a través del turismo. Por otro lado, la amplitud de los medios de comunicación internacional, la presencia cada vez más significativa de la comunidad dominicana residente en Nueva York respecto a la población local, la propia crisis del Estado y la cada vez mayor influencia del orden neoliberal, algunos de cuyos supuestos son precisamente la despolitización de la sociedad y la fragmentación del interés colectivo en miríadas de proyectos

<sup>22</sup> Campillo Pérez, J., *op. cit.*

individuales, han potenciado una cultura hedonista, indiferente a la política y profundamente pesimista respecto al porvenir del país como nación. En ese contexto, el abstencionismo electoral deviene una consecuencia más que natural.

Así, los recientes resultados electorales han evidenciado un reacomodo significativo del electorado nacional. El electorado perredeista, tradicionalmente de origen urbano, se reclutaba de las filas del proletariado industrial y de las masas marginales. Con los cambios sociales aludidos y el surgimiento del PLD como partido de masas, esa realidad se ha reconstituido. Ya desde las elecciones de 1986 se observó tanto en las encuestas electorales, como en los propios resultados, que el PLD ganaba espacio político en aquellos sectores sociales antes dominados por el PRD. Las elecciones de 1990 profundizaron esa tendencia y el PLD, en cierto modo, surgió como el partido de las clases trabajadoras.

En casi todos los centros donde existía un significativo proletariado azucarero o vinculado a las zonas francas, como en las ciudades del este (San Pedro de Marcoris, La Romana, etcétera), el PLD obtuvo una ventajosa mayoría sobre sus rivales (PRSC y PRD). No obstante la influencia del PLD no se limitaría a las clases trabajadoras urbanas: penetraría en el campesinado y en el proletariado agrícola, sobre todo en la región del Cibao, típica zona agrícola, bastión del reformismo y obtendría importantes contingentes de votos de las clases medias. Sin embargo, en las masas marginales urbanas, sobre todo en Santo Domingo, el PLD no encontró igual simpatía, convirtiéndose en una fuerza política secundaria respecto al PRSC y el PRD.

En las elecciones de 1990, el PRSC de Balaguer, como partido conservador neopopulista, también sufriría una profunda recomposición de su electorado. A este respecto, lo más significativo es su pérdida de capacidad movilizadora frente a los campesinos, sobre todo en la región del Cibao. Sin embargo, el reformismo continuaría ejerciendo gran influencia en amplios sectores pequeñoburgueses urbanos, pero sobre todo aumentaría su capacidad de penetración en las masas marginales de la ciudad de Santo Domingo. De este modo, el reformismo concentraría su electorado en Santo Domingo, en algunas provincias del norte y en las provincias menos pobladas y más atrasadas social y económicamente de la región sur del país.

Finalmente, el PRD, tras su prolongada crisis interna (desde 1986), vería poco a poco reducirse su capacidad de movilización de masas en aquellos segmentos de población que tradicionalmente le pertenecían: obreros fabriles, pequeñoburgueses urbanos, etcétera. Sin embargo, de la práctica liquidación de su base de masas, una vez que Jacobo Majluta salió de la organización, en una hábil campaña electoral, Peña Gómez logró en pocos meses recuperar gran parte de su espacio político, pero ahora como tercera fuerza. De todos modos, el PRD conservó su gran capacidad de

penetración en los sectores marginales urbanos de las principales ciudades del país (sobre todo en Santo Domingo) y logró penetrar en importantes segmentos campesinos, conservando un relativo peso en sectores obreros industriales.

#### 7. LA CRISIS POSTELECTORAL

La reelección de Joaquín Balaguer con una precaria y cuestionable mayoría sobre su principal competidor, el PLD, ha profundizado la crisis de legitimidad en que se encontraba sumergido el sistema partidario dominicano. Esto ha planteado una crisis de carácter político, pues amplios sectores populares no reconocen al gobierno la legitimidad política necesaria para su estabilidad. Por otro lado, se ha agudizado la incapacidad de los partidos políticos para articular un discurso renovador frente a los sectores populares, capaz de generar nuevas modalidades de movilización política.

Como habíamos expresado al principio de este trabajo, todas las expectativas electorales señalaban a Bosch como el candidato favorito. La encuesta Gallup, patrocinada por el periódico *El Siglo* (para sólo señalar el de mayor difusión e influencia pública) lo revelaba claramente. El cuadro 6 resume la información básica y se advierte que el candidato con crecientes preferencias entre el electorado y con significativa ventaja sobre sus opositores es Bosch, el cual en octubre de 1989 concentraba el 29% y en marzo de 1990 reunía el 36%. Sin embargo, la candidatura de Balaguer se sostenía con un significativo promedio de 25.5%. Esto último era un claro indicio de la existencia de un electorado coherente en torno a la figura del viejo caudillo conservador, pese al deterioro político de su régimen. Por otro lado, la candidatura de Peña Gómez, aun cuando no logró el sistemático ritmo de crecimiento de la de Bosch, en el último período (abril) creció significativamente en el cuadro de preferencias electorales, a diferencia de la de Majluta, cuyo descenso fue sistemático en todo lo que va de octubre 1989 a abril 1990. Finalmente, habría que subrayar la constante permanencia en el electorado de un elevado número de electores "indecisos" (10% promedio).

Estas simples estadísticas revelan la complejidad de la situación electoral. Ninguno de los cuatro principales candidatos alcanzaba por sí solo un holgado índice de preferencia que lo constituyera en aplastante mayoría. En abril, Bosch, el de mayor simpatía, sólo obtuvo un 36%. En esas condiciones, la formación de una mayoría electoral evidentemente pasaba por la concertación y las alianzas políticas.

Los datos ponen de manifiesto que, dado el elevado y permanente índice de "indecisos" y reconocido el sistemático fortalecimiento de la candidatura de Peña Gómez como tercera fuerza, la candidatura de Bosch, pese a su significativa ventaja sobre la de Balaguer, podía encontrar en

la última etapa serias dificultades para derrotarlo, dependiendo de la inclinación mayoritaria de los indecisos por Balaguer y de la posibilidad de que la candidatura de Peña Gómez llegara a alcanzar (como ocurrió) más de un 20% del electorado. En una palabra, en las condiciones de ruptura de la tradicional bipolarización electoral, propia de la tradición populista, la formación de una mayoría relativa era frágil, pudiéndose reorientar los resultados previstos por acontecimientos de última hora en el manejo de la campaña.

Más allá de los manejos fraudulentos del proceso electoral, muchos de los cuales fueron evidentes (como la compra de registros electorales y la duplicación de cédulas personales de identidad), estimamos que en la derrota del PLD gravitaron errores estratégicos: en la política de aliados y tácticas y en el manejo de última hora de la campaña. Este partido confió en que la dinámica de las preferencias electorales lo colocaba como el "favorito" para derrotar solo a Balaguer. Como ya lo hemos demostrado, en las condiciones de constitución de una frágil mayoría relativa este cálculo era incorrecto, pues sobreestimaba el significado político de las preferencias electorales y menospreciaba la consistencia del voto balaguerista.

En segundo lugar, la estrategia de "bloque cerrado" dificultó al PLD el diseño de mecanismos flexibles que le permitieran el acercamiento a grupos corporativos y de presión de la sociedad civil, a través de la defensa de sus demandas, al margen del aparato partidario. Así, para sólo tomar un caso paradigmático, pese a los éxitos en el manejo publicitario de la campaña peledista,<sup>23</sup> cuando la organización entró en conflicto con los aparatos de Estado, como la Iglesia católica y las fuerzas armadas en su alta jerarquía, quedó sola en el debate, pues se encontraba aislada de aquellos grupos de presión que podían mediar en un conflicto de esa naturaleza. En estas condiciones, quedó restringido su campo de maniobra a la hora de cuestionar los resultados mismos del proceso electoral.

Como era de esperarse, la precaria mayoría alcanzada por el balaguerismo en las elecciones, ante el descrédito gubernamental y una vez finalizado el proceso electoral, desató una crisis política. Si bien la madrugada del 17 de mayo los primeros boletines de la Junta Central Electoral (JCE) señalaban a Bosch como el favorito, a partir del sexto boletín los resultados comenzaron a inclinarse hacia Balaguer. La situación se hizo sumamente tensa en Santo Domingo: en la tarde de ese mismo día, en una improvisada manifestación frente al local de su partido, Bosch denunció el fraude electoral que se cometía en ese momento, amenazando con marchar junto a sus partidarios hacia las oficinas de la JCE a defender su triunfo.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Cordero, Margarita, *op. cit.*

<sup>24</sup> Planteado el cuestionamiento a los resultados electorales que la Junta Central Electoral (JCE) estaba difundiendo, la Comisión de Observadores Extranjeros, pre-

La crisis política estaba desatada. En los 58 días que tardó la JCE en proclamar al ganador oficial de las elecciones (del 17 de mayo al 13 de julio), el gobierno quedó totalmente aislado. Sin embargo, en la oposición, sobre todo en las fuerzas políticas mayoritarias (el PLD y el PRD) se observaban posiciones distintas y encontradas respecto al manejo de la crisis. El PLD insistía en el fraude electoral y la ilegitimidad de sus resultados; en cambio, el PRD, admitiendo las irregularidades del proceso, reconocía su legitimidad. De aquí que mientras para el PLD de lo que se trataba era de la ilegitimidad del nuevo gobierno, para el PRD se trataba de lograr una estratégica posición como tercera fuerza política, que la hiciera imprescindible en el plano parlamentario y decisiva en el nacional. En la práctica, ello produjo un rotundo desacuerdo entre ambos partidos, lo que impidió diseñar una homogénea posición en el Congreso como bloque opositor, al elegirse el 16 de agosto las nuevas autoridades congresionales y proclamarse el nuevo presidente.<sup>25</sup>

Sin embargo, la división en la oposición no facilitó a Balaguer la adquisición de espacio político y la salida del aislamiento. Prácticamente hasta principios de agosto el gobierno se mantuvo callado. A partir de entonces y apoyado en la proclamación de los resultados oficiales de las elecciones por JCE, rompería su silencio con la proclamación de un Pacto de Solida-

sidida por Jimmy Carter, intervino, acordándose entre los principales candidatos la suspensión momentánea del conteo y la emisión de boletines, así como el recuento de votos. Tras la salida de Carter del país algunos días después, la JCE violó los acuerdos y continuó emitiendo boletines. Finalmente, se logró un acuerdo de revisión de votos, bajo la supervisión de una comisión de ciudadanos observadores. El recuento fue muy lento, irregular y en definitiva, nunca se terminó, encontrándose durante la verificación serias irregularidades. Pese a todo ello, 58 días después de haberse realizado las elecciones, el 13 de julio, la JCE proclamó a Joaquín Balaguer como el candidato triunfador en los comicios.

<sup>25</sup> La ceremonia de instalación del nuevo gobierno el 16 de agosto de 1990, evidencia la histriónica y frágil situación política dominicana. El PLD había determinado no asistir a la ceremonia en protesta por la ilegalidad del nuevo gobierno. El PRD había amenazado con otro tanto si el presidente Balaguer no se comprometía públicamente a realizar reformas democráticas en el Estado. Esto lo había declarado Peña Gómez en carta dirigida al presidente. Este último le respondió en una vaga comunicación diciendo que ciertamente estaba dispuesto a realizar esas reformas. En esa situación, a la hora de elegir los bufetes directivos de las cámaras de diputados y de senadores se presentó el *impasse*. El PRD y el PLD habían discutido un acuerdo congresional que les aseguraba el control de la Cámara de Diputados, pero el acuerdo no se materializó. Por otro lado, el propio Balaguer no logró imponer en la Cámara de Senadores un candidato a su propia mayoría senatorial. En esas condiciones no se podía reunir la Asamblea Nacional, pues no tenía presidente (el cual por protocolo es el presidente del Senado). A estas alturas Balaguer juró como nuevo presidente ocn el presidente de la Suprema Corte de Justicia; el presidente de la Cámara de Senadores fue finalmente reformista, pero salió electo con el apoyo de la oposición, mientras que en la Cámara de Diputados, con el apoyo del partido de gobierno, era elegido presidente un miembro del PLD.

ridad Económica (PSE), convocando para el mismo al empresariado nacional y al movimiento sindical.

El PSE era el primer paso del gobierno para romper su aislamiento político. A la firma del Pacto sólo se convocó a los grupos corporativos de la sociedad civil, pretendiendo con ello aislar a la oposición política, al desplazar el eje de la crisis al campo de la política económica y protegiéndose así de la crítica propiamente política en el ámbito estatal. En segundo lugar, los términos sustantivos del PSE recogían muchos de los puntos demandados por el Consejo Nacional de Hombres de Empresa (CNHE), como medidas imprescindibles de política económica para el manejo de la crisis: modificación de la política cambiaria, eliminación del déficit fiscal, liberalización de precios y eliminación de subsidios, modernización arancelaria y eliminación de las monetarias llamadas "inorgánicas".

El contenido político de esta propuesta era claro: intentaba romper los posibles lazos del empresariado con la oposición política, la cual había acogido precisamente un programa semejante en la campaña. Balaguer hacía suya parte del programa de la oposición, el cual, en su momento, fue un diseño del propio empresariado. La situación empresarial se resolvía en una disyuntiva: si se acogía al programa que proponía el PSE reconocía la legitimidad del gobierno, si se negaba, negaba su propio programa, tal como lo había discutido con la oposición y tal como lo había presentado a la nación en abril, en la Convención de Hombres de Empresa. Por eso el 7 de agosto el empresariado firmó rápidamente el PSE.

Tal como se diseñó el PSE, el nuevo arancel y la nueva política cambiaria desprotegían al productor local, industrial y agropecuario, pero favorecían al sector turismo, a las zonas francas y en general al capital financiero. La supuesta unidad empresarial se esfumaba. El empresario industrial medio quedaba desprotegido, mientras el capital financiero se frotaba las manos. Balaguer, al propiciar la división en el seno del empresariado no sólo ganaba tiempo sino, también, capacidad negociadora.

De ese modo se rompía uno de los amarres: el que vinculaba al empresariado con la oposición política del régimen. Sin embargo, Balaguer firmaría el pacto sin mucho entusiasmo, ya que era sobre todo un imperativo táctico. Por su parte los empresarios tampoco cifraron en el PSE muchas esperanzas. Desde el principio ambos sectores sabían que lo violarían: el gobierno porque le era poco menos que imposible suspender completamente las emisiones inorgánicas sin profundizar la ruptura con su base de masas, dado que toda la política de empleo público, los subsidios a los alimentos y el mantenimiento de las empresas estatales se financiaban de ese modo, y puesto que una completa liberalización de la tasa de cambio lo dejaría sin capacidad de maniobra frente al empresario. Este último no estaba dispuesto a acogerse a un acuerdo cambiario que favorecía al gobierno, contribuyendo a la larga al mantenimiento del estatismo; deseaban sobre todo emplear el arma de la negociación de la tasa

de cambio para lograr imponer su política económica al gobierno. En la práctica ambos actores se beneficiaban de las violaciones de su propio pacto.

Pero la práctica del PSE, pese a sus incoherencias, facilitó al gobierno el inicio de una política de ajuste que eliminó subsidios a los combustibles y alimentos y al mismo tiempo, le ayudó a recortar los ya reducidos programas sociales. El escaso 30% de aumento salarial a los empleados públicos que el PSE contemplaba, y el 60% de aumento a los sueldos de los empleados del sector privado finalmente decretado por la Secretaría del Trabajo, no paliarían el rápido deterioro de la calidad de vida que provocó la galopante inflación desatada por la liberalización de precios.

Es en este momento que interviene el actor popular. La crisis postelectoral no sólo aisló al gobierno, sino que desarticuló las relaciones entre el sistema partidario y el movimiento social. La lucha de masas que se desartaría frente al reconocimiento oficial del triunfo de Balaguer, estaría dirigida por organizaciones populares y sindicales y no por los grandes partidos de masas.

Se invitó a participar en el PSE a las principales organizaciones sindicales, pero éstas en su mayoría no asistieron a las discusiones, ni lo firmaron. Por el contrario, las centrales sindicales, junto con las organizaciones barriales y populares realizaron una huelga general el 13 y 14 de agosto, dos días antes de la toma de posesión de Balaguer para el nuevo período 1990-1994. La huelga demostró la gran capacidad de convocatoria del movimiento popular, prácticamente paralizando al país por 48 horas. Sin embargo, los resultados de la huelga no se materializarían en lo inmediato en ningún tipo de acuerdo entre el movimiento sindical y popular con el gobierno, pues Balaguer dilataría la respuesta al conjunto de demandas del movimiento de masas esperando el momento oportuno para dividirlo. La ocasión propicia se presentaría a principios de septiembre, cuando las organizaciones sindicales y populares anunciaron un nuevo llamado a huelga general de 72 horas para mediados del mes.

Ya en ese momento las consecuencias del "ajuste desordenado" hacían estragos en la población, a lo que se unía la crisis energética, parcialmente consecuencia de la crisis del Medio Oriente, tras la ocupación iraquí de Kuwait. En esas condiciones la parálisis del país era casi total, las reservas internacionales se habían agotado y el conflicto entre gobierno y empresarios se agudizaba y la incapacidad del primero para el manejo de la crisis era evidente; en esas circunstancias una huelga general lo colocaba en una frágil posición. Balaguer obró con rapidez: días antes de iniciarse la huelga manifestó su deseo de dialogar con el movimiento sindical, suavizó su dura postura de días anteriores mostrándose dispuesto a realizar concesiones, al tiempo que criticaba la especulación y a los empresarios que monopolizaban la generación de dólares, es decir al turismo y a la banca.

A la reunión concertada con el presidente no asistió uno de los sectores del movimiento popular: el más radicalizado. Sin embargo, el grueso del

movimiento sindical discutió con el presidente los términos de un acuerdo que contemplaba aumentos salariales, medidas de control de precios, planes de asistencia, revisión del Código de Trabajo, etcétera. Como resultado de ello, la huelga convocada para mediados de septiembre se desinfló. Balaguer aparecía ahora como mediador interesado en proteger al "pueblo" del afán especulador de los comerciantes y del empresariado en general, mientras el movimiento sindical se vio forzado a acogerse a un compás de espera que le daba tiempo al gobierno.

Quizás el resultado más importante de la reunión de los sindicatos con el presidente fue la división del movimiento popular entre un sector moderado dispuesto a la negociación, compuesto por la mayoría de las centrales sindicales, y un sector radical sin proposiciones programáticas claras. En ese momento, si bien el gobierno no lograba romper el aislamiento político y su credibilidad ante las masas era nula, la división del movimiento popular le brindaba una mejor posición para negociar, no con las organizaciones populares, sino con el alto mando del empresariado, específicamente con la fracción financiera de la burguesía.

Por lo anterior, la huelga general de 72 horas convocada para mediados de septiembre por el sector más radical del movimiento popular no tuvo gran acogida, aunque en el interior del país fue significativa. En esas condiciones el movimiento popular se encontraba atado de manos.

No obstante, el gobierno continúa aislado de las masas y su ruptura con la fracción hegemónica de las clases dominantes se ha agudizado. La debilidad de los vínculos entre los partidos de masas y la sociedad civil ya no se reduce a la incapacidad de convocatoria de las organizaciones políticas, sino que pone en tela de juicio la legitimidad misma del gobierno como instancia racionalizadora y ordenadora de la reproducción social. A ello se añade el atenuante de la división entre las fracciones bancaria y turística de la burguesía y los grupos industriales.

En tales condiciones, las bases materiales de la acumulación de capital han entrado en crisis, planteándose en el país el inicio de una crisis hegemónica, cuyo desarrollo podría conducir a un modelo autoritario que interrumpiría la continuidad del precario proceso democrático dominicano.

## CUADRO 1

## RELACIÓN DE VOTANTES Y NO VOTANTES EN LAS ELECCIONES DOMINICANAS EN EL PERÍODO 1961-1990

Año	Electores inscritos <sup>1</sup>	Electores votantes		Electores no votantes	
		Absoluto	%	Absoluto	%
1961	Desconocidos	1 054 944	—	Desconocido	—
1966	Desconocidos	1 345 404	—	Desconocido	—
1970	Desconocidos	1 238 205	—	Desconocido	—
1974	2 046 323	1 046 323	52.38	995 364	47.62
1978	2 283 784	1 655 807	72.50	627 977	27.50
1982	2 601 684	1 922 367	73.89	679 317	26.11
1986	3 039 347	2 195 455	72.23	843 892	27.77
1990	3 275 570	1 910 253 <sup>2</sup>	59.40	1 365 237	40.60

<sup>1</sup> Hasta 1970 no existió registro electoral y los electores votaban con su cédula personal de identidad. Es a partir de las elecciones de 1974 que comienza a votarse con el registro electoral y es por ello que a partir de esta elección se puede estimar el peso de la abstención electoral.

<sup>2</sup> Las elecciones de 1990 fraccionaron el voto presidencial, congresional y municipal. La estimación del número total de electores y de la abstención se ha hecho con base en la votación presidencial.

FUENTE: Junta Central Electoral.

## CUADRO 2

EVOLUCIÓN DEL VOTO EN LAS ÚLTIMAS ELECCIONES GENERALES:  
1986 y 1990

(Cifras absolutas y relativas)

Partidos	Elecciones			
	1986		1990	
	Absoluto	%	Absoluto	%
PRSC	855 565	40.5	637 763	33.3
PRD	706 588	33.4	438 647	23.0
PLD	387 881	18.3	647 038	33.8
PAC	5 628	0.2	4 822	0.2
PPC	5 055	0.2	4 196	0.2
MCN	3 282	0.1	—	—
PUD	667	—	331	—
PCD	4 761	0.2	—	0.1
PNVC	2 927	0.1	2 801	0.3
FNP	6 684	0.3	5 956	—
PDN	1 202	—	—	—
PQD	18 888	0.9	23 138	1.2
PLE	112 617	5.3	3 329	0.1
PACOREDO	—	—	1 793	0.1
PDI	—	—	2 042	0.1
PRI	—	—	132 344	6.9
BS	—	—	2 688	0.1
PPD	—	—	629	—
PTD	—	—	2 736	0.1
Total	2 111 745	99.5	1 910 253	99.5

NOTA: Las siglas de los partidos tienen el siguiente significado: PRSC: Partido Reformista Social Cristiano; PRD: Partido Revolucionario Dominicano; PLD: Partido de la Liberación Dominicana; PAC: Partido Acción Constitucional; PPC: Partido Popular Cristiano; MCN: Movimiento de Conciliación Nacional; PUD: Partido Unión Democrática; PCD: Partido Comunista Dominicano; PNVC: Partido Nacional de Veteranos Civiles; FNP: Fuerza Nacional Progresista; PDN: Partido Democrático Nacional; PQD: Partido Quisqueyano Demócrata; PLE: Partido la Estructura y a partir de 1990 Partido Liberal la Estructura; PACOREDO: Partido Comunista de la República Dominicana; PDI: Partido Democrático Institucional; PRI: Partido Revolucionario Institucional; BS: Bloque Socialista; PPD: Partido Popular Democrático; PTD: Partido de los Trabajadores Dominicanos.

— No participación en el proceso electoral.

FUENTE: Junta Central Electoral, 1986, 1990.

## CUADRO 3

RESULTADOS NACIONALES DE LAS VOTACIONES DE 1990  
(Absolutos y %)

Partidos	Presidenciales		Votaciones congresionales		Municipales	
	Absoluto	%	Absoluto	%	Absoluto	%
PRSC	637 763	33.3	575 771	32.0	568 610	32.0
PRD	438 647	22.9	415 420	23.1	414 607	23.3
PLD	647 038	33.8	584 740	32.5	568 478	32.0
PLE	3 329	0.1	5 106	0.2	6 219	0.3
PQD	23 138	1.2	33 931	1.8	38 566	2.1
UD	331	—	404	—	379	—
FNP	5 956	0.3	9 171	0.5	9 200	0.5
PAC	4 822	0.2	5 359	0.2	4 686	0.2
PPC	4 196	0.2	7 207	0.4	5 206	0.3
MCN	—	—	—	—	—	—
FNVC	2 801	0.1	4 600	0.2	4 599	0.2
PACOREDO	1 793	0.1	2 347	0.1	2 499	0.1
PDI	2 042	0.2	2 071	0.1	2 060	0.1
PRI	132 344	6.9	131 280	7.3	134 169	7.5
BS	2 688	0.1	3 679	0.2	3 406	0.2
PPD	629	—	841	—	1 062	—
PTD	2 736	0.1	3 404	0.2	5 582	0.3
Totales	—	99.5	—	98.8	—	99.1
Votos válidos	1 910 253	—	1 785 331	—	1 769 328	—
Votos nulos	48 356	—	35 222	—	36 489	—

NOTA: Electores inscritos: 3 275 570; votos observador: 14 442; mesas electorales en el país: 6 663.

<sup>1</sup> El PRSC fue aliado a las siguientes organizaciones políticas, fundamentalmente en las candidaturas presidenciales: PLE, PQD, FNVC y PDI.

<sup>2</sup> El PRD se alió al BS y al PTD.

<sup>3</sup> El PLD se alió a la UD en todas las candidaturas.

FUENTE: Junta Central Electoral 1990

## CUADRO 4

## DISTRIBUCIÓN DE LA VOTACIÓN PRESIDENCIAL, CONGRESIONAL Y MUNICIPAL EN LAS ELECCIONES DE 1990 (Absoluto y %)

<i>Partidos</i>	<i>Presidencial</i>		<i>Votaciones congresionales</i>		<i>Municipal</i>	
	<i>Absoluto</i>	<i>%</i>	<i>Absoluto</i>	<i>%</i>	<i>Absoluto</i>	<i>%</i>
PRSC y aliados <sup>1</sup>	669 073	35.4	575 771	32.2	568 610	32.0
PLD	647 369	33.8	585 144	32.7	568 857	32.0
PRD y aliados	444 071	22.9	422 503	23.6	423 135	24.0
PRI	132 344	6.9	131 280	7.3	134 169	7.5
Otros	17 396	0.9	70 633	3.9	74 557	9.2
Total	1 910 253	99.9	1 785 331	99.7	1 769 328	99.7

<sup>1</sup> Sólo en la candidatura presidencial se sumaron los votos de los aliados del PRSC porque en las candidaturas congresionales y municipales en muchas provincias y municipios fueron separados.

FUENTE: Junta Central Electoral.

## CUADRO 5

## REPRESENTANTES CONGRESIONALES POR PARTIDO: 1986 Y 1990

<i>Partidos</i>	<i>Senadores</i>		<i>Diputados</i>	
	<i>1986</i>	<i>1990</i>	<i>1986</i>	<i>1990</i>
PRSC	19	16	53	41
PDR y aliados	7	2	49	33
PLD	2	12	18	44
PRI <sup>1</sup>	—	—	—	2
Total	28	30	120	120

<sup>1</sup> El PRI no participó en las elecciones de 1986.

FUENTE: Junta Central Electoral.

## CUADRO 6

EVOLUCIÓN DE LAS PREFERENCIAS ELECTORALES DE LOS CUATRO PRINCIPALES CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA EN EL PERÍODO JULIO DE 1989-MARZO DE 1990. (Cifras relativas)

<i>Periodos</i>	<i>Candidatos</i>				<i>Indecisos</i>
	<i>Juan Bosch</i> PLD	<i>Joaquín Balaguer</i> PRSC	<i>José Fco. Peña Gómez</i> PRD	<i>Jacobo Majluta</i> PRI	
Julio de 1989	25.0	25.0	16.0	16.0	9.0
Octubre de 1989	29.0	27.0	11.0	14.0	10.0
Enero de 1990	34.0	24.0	13.0	12.0	7.0
Marzo de 1990	36.0	26.0	15.0	9.0	9.0

FUENTE: Encuesta Gallup/*El Siglo*, abril 2, 1990, periódico *El Siglo*.

CUADRO 7

SINOPSIS SOCIOPOLITICA DE LOS PROCESOS ELECTORALES DOMINICANOS: 1961-1990

<i>Elecciones</i>	<i>Principales partidos y candidatos</i>	<i>Fuerzas sociales y políticas en lucha</i>	<i>Carácter de las luchas político-electorales y sus resultados</i>
1961	PRD (Juan Bosch)	Campesinado + masas marginales urbanas + sectores obreros + estratos burocráticos y militares del Estado.	Lucha antioligárquica. Triunfo electoral de Juan Bosch y el PRD. Primeras elecciones después de la muerte de Trujillo.
	UCN (Viriato Fiallo)	Pequeña burguesía urbana + sectores obreros + oligarquía antitrujillista.	
1966	PRD (Juan Bosch)	Clase obrera urbana + masas marginales urbanas + sectores pequeña burguesía urbana.	Lucha antioligárquica nacionalista y anti-imperialista. Gran enfrentamiento histórico de las fuerzas populares urbanas emergentes tras el proyecto populista con la oligarquía y el campesinado. Triunfo de Balaguer y derrota histórica de las fuerzas antiimperialistas.
	PR (Joaquín Balaguer)	Campesinado + oligarquía conservadora + burocracia de Estado + estamento militar.	

CUADRO 7 (Continuación)

<i>Elecciones</i>	<i>Principales partidos y candidatos</i>	<i>Fuerzas sociales y políticas en lucha</i>	<i>Carácter de las luchas político-electorales y sus resultados</i>
1978	PRD (Antonio Guzmán)	Sectores del campesinado + clase obrera urbana + sectores empresariales financiero-industriales + sectores clase media urbana.	Lucha contra el régimen balaguerista y transición hacia la democracia. Afirmación del modelo populista de desarrollo. Triunfo del PRD y fraccionamiento del bloque dominante en un sector que apoya al PRD triunfante y un sector conservador.
1982	PR (Joaquín Balaguer)	Sectores campesinos + empresariado conservador + sectores militares + burocracia cívico-militar y pequeña burguesía conservadora.	Primera gran crisis del sistema populista. Reagrupamiento del balaguerismo que no impide el triunfo de nuevo del PRD con Salvador Jorge Blanco.
1982	PRSC (Joaquín Balaguer)	Clase obrera urbana + clase media urbana + empresariado industrial y oligarquía financiera + sectores marginales urbanos.	Campesinado + sectores pequeño burgueses conservadores + sectores empresariales y masas marginales.

CUADRO 7 (Continuación)

<i>Elecciones</i>	<i>Principales partidos y candidatos</i>	<i>Fuerzas sociales y políticas en lucha</i>	<i>Carácter de las luchas político-electorales y sus resultados</i>
1986	PRD (Jacobo Majluta)	Clase obrera urbana + sectores de clase media y fracción del empresariado + sectores marginales urbanos.	Gran crisis interna del PRD. Deterioro del modelo populista. Triunfo de Balaguer y vuelta al poder del PRSC. Comienza a emerger el PLD (de Juan Bosch) como tercera fuerza.
	PRSC (Joaquín Balaguer)	Campesinado + sectores obreros + pequeña burguesía + masas marginales y sectores empresariales.	El empresariado se divide. Aguda crisis de representación del Estado populista. Grandes movimientos de masas y emergencia de nuevos movimientos sociales.
	PLD (Juan Bosch)	Pequeña burguesía urbana + sectores obreros.	
1990	PRSC (Joaquín Balaguer)	Sectores campesinos + sectores marginales urbanos y una fracción del empresariado.	Crisis estatal generalizada. Completo agotamiento del Estado populista. División en el empresariado. División en el PRD y salida de Jacobo Majluta formando el PRI. Emergencia del PLD de Bosch como el mayor partido de masas del país. Gran oposición al balaguerismo pero división entre las fuerzas políticas opositoras.
	PLD (Juan Bosch)	Clase media urbana + clase obrera industrial + amplios sectores empresariales.	Triunfo crítico del PRSC y permanencia en el poder de Balaguer. Aguda crisis política nacional.
	PRD (José F. Peña-Gómez)	Masas marginales urbanas + sectores pequeña burguesía urbana + sectores campesinos.	